

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 123.

En la Gaceta de Madrid núm. 30 del domingo 30 de enero último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

Visto el expediente instruido para la clasificación de la carretera de Sacedon á Cifuentes, que debe formar parte de la que desde el primero de dichos puntos va á empalmar con la de Madrid á la Junquera en Almadrones, ó donde aconsejen los estudios:

Vistos los informes del Ingeniero Jefe, Consejo provincial y Gobernador de la provincia de Guadalajara, y el dictamen de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos:

Considerando que dicha carretera se halla en las circunstancias que expresa el párrafo tercero del art. 4.º de la ley de 22 de julio de 1857;

Y en atención á las razones que de conformidad con los indicados dictámenes me ha expuesto mi Ministro de Fomento, vengo en declarar de segundo orden la mencionada carretera.

Dado en Palacio á 23 de enero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla.

Obras públicas.

Ilmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de una instancia elevada por D. Pedro Duro, Administrador de la empresa metalúrgica de Langreo, pidién-

do se rectifique la aplicación dada por Real orden de 6 de diciembre de 1857 al aprovechamiento del agua del río Candín, que le fué concedido como motor de una fábrica de beneficiar hierro, proyectada en término de Pradon de la Felguera, concejo de Langreo, provincia de Oviedo; visto nuevamente el expediente instruido en aquella fecha con arreglo á lo prescrito en la Real orden de 14 de marzo de 1846, y el informe que entonces evacuó la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, ha tenido á bien declarar que la autorización concedida por la citada Real orden de 6 de diciembre de 1857, se entiende para aprovechar el agua del río Candín en el lavado de los minerales y carbones, producción del vapor y demás necesidades de la referida fábrica.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de enero de 1859.—Corvera.—Señor Director general de Obras públicas.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Toledo y el Juez de Hacienda de la misma, de los cuales resultan:

Que condenada la villa de Escalona por sentencia en grado de súplica, en el pleito que sostuvo con D. Francisco Navarro sobre propiedad de cierto número de fanegas de tierra, á la pérdida del terreno cuestionado, valor de usufructos y costas de la tercera instancia, el Juez de Hacienda, después de varios trámites que siguió el negocio para el pago de las cantidades que por efecto de la indicada sentencia debe pagar á Navarro aquella villa, despachó ejecución y embargo contra su Ayuntamiento en febrero de 1857:

Que suscitada, en su consecuencia, por el Gobernador, oído el Consejo provincial, competencia al mismo Juez, vino esta á declararse mal formada por Real decreto de 25 de mayo del año próximo pasado, en atención á haberse infringido en su tramitación el art. 3.º del Real decreto de 4 de junio de 1847;

Y que subsanada conforme á este Real decreto la indicada informalidad, se ha elevado de nuevo la competencia por las Autoridades contendientes para su decisión:

Vistos los artículos del 26 al 43 y 95 de la ley de 5 de febrero de 1825, los artículos 150, 155, 186 y siguientes de la

de 5 de julio de 1856 y los artículos 91, 95, 98, 101, 105, 104, 107 y 108 de la de 9 de enero de 1845, declarada en todo su vigor por Real decreto de 16 de octubre del citado año de 1856, en las cuales se establece de un modo expreso la formación para cada año de un presupuesto municipal de gastos é ingresos, que podrá ser adicionado según lo exijan las circunstancias, y el pago de estos gastos verificado por un encargado especial conforme al presupuesto y bajo la responsabilidad correspondiente:

Visto el Real decreto de 13 de marzo de 1847, que establece las reglas convenientes para la mas fácil ejecución de este modo de pago:

Considerando:

1.º Que el sistema de contabilidad comunal establecido por las leyes citadas estaría expuesto á una perturbación de trascendencia para el servicio público, si los acreedores pudieran ventilar con los Ayuntamientos judicialmente otras cuestiones en materia de créditos que las que se susciten sobre su legitimidad cuando es contestada, ó sobre su preferencia cuando median circunstancias que exigen que sea declarada por los Tribunales.

2.º Que conforme á lo determinado en el Real decreto, que también se ha citado, si bien es forzoso que se incluya el crédito en el presupuesto municipal y su subsiguiente pago cuando se halla declarado por ejecutoria, cual sucede en el presente negocio, esta inclusión en el presupuesto, además de excluir de todo punto la vía ejecutiva, solo puede reclamarse, caso necesario, por los interesados, ante la Autocidad que es competente para ejecutar el indicado pago del crédito, con sujeción á las reglas que en el mismo Real decreto se prefijan;

Oído el Consejo de Estado, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración, y lo acordado.

Dado en Palacio á 23 de enero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Administración.—Negociado 6.º

Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente sobre autorización negada por V. S. al Juez de Hacienda de esa provincia para procesar á D. Francisco Gil, Alcalde que fué de la villa de Genalguacil, por supuestos abusos en el ejercicio de su cargo, han consultado lo siguiente:

Estas secciones han examinado el expediente en virtud del que el Goberna-

dor de la provincia de Málaga ha negado al Juez de Hacienda de la misma la autorización necesaria para continuar los procedimientos incoados contra D. Francisco Gil, Alcalde que fué de la villa de Genalguacil.

Resulta de este expediente:

Que en febrero de 1846 pasó D. Gregorio Casas á la villa de Genalguacil como comisionado de Hacienda para cobrar algunas contribuciones atrasadas, y á este efecto, de acuerdo con el Alcalde, citó, por medio del alguacil, á varios vecinos que habían sido individuos del Ayuntamiento en diferentes años para liquidar con ellos los créditos pendientes:

Que no habiéndose presentado ninguno de los individuos citados, pasó el comisionado de la Hacienda á casa del Alcalde Gil Gomez, donde expuso su queja y reclamó la cooperación necesaria á presencia del cobrador de contribuciones y algunos individuos del Ayuntamiento, recibiendo, según su aserto, como respuesta del Alcalde, entre amenazas y expresiones injuriosas para las Autoridades superiores, la orden de no permanecer en el pueblo mas de tres ó cuatro días:

Que habiéndose retirado en efecto el comisionado, se comenzaron á instruir las primeras diligencias en averiguación de estos hechos por el Subdelegado de Rentas, con aprobación y excitación del Intendente de la provincia, y aunque de las declaraciones tomadas á los individuos del Ayuntamiento, testigos presentes de lo ocurrido, y aun al mismo Alcalde, no resultó la comprobación suficiente, el Juez de Hacienda en 13 de febrero del 54 pidió al Gobernador de la provincia autorización para continuar los procedimientos contra el mencionado Alcalde:

Que el Gobernador la denegó, entendiéndolo, de acuerdo con el Consejo provincial, que al tenor de las disposiciones vigentes es de la competencia de la Administración castigar gubernativamente los delitos y faltas que se cometan por los funcionarios encargados de llevar á cabo ó auxiliar la cobranza de contribuciones, y no puede tener lugar por lo tanto la aplicación que el Juez de Hacienda pretende hacer del art. 238 del Código penal:

Vista la Real orden de 29 de diciembre de 1852, en que se previene lo conveniente para que las justicias de los pueblos cumplieren sin retardo los despachos de las Autoridades de la Hacienda bajo las penas que se expresan, con formación de causa, por los Tribunales de la misma Real Hacienda en caso de reincidencia:

Visto el párrafo tercero del art. 75 de la ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos, que designa entre las atribuciones propias de los Alcaldes, en el concepto de delegados del Gobernador, la de activar y auxiliar el cabro y recaudación de las contribuciones prescindiendo, el apoyo de su autoridad a los recaudadores:

Visto el art. 76 de la misma ley, según el que si un Alcalde dejase de ejecutar algún acto prescrito por la ley, el Jefe Político (hoy Gobernador), después de haberlo requerido al cumplimiento, deberá proceder oficialmente a su ejecución, ya por sí, ya por comisionados, dando en seguida parte al Gobierno de la desobediencia del Alcalde para la resolución a que hubiese lugar:

Vistos los artículos 65, 92 y 102 del Real decreto para el establecimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería de 25 de mayo de 1855, en los que se declara que han de considerarse como gubernativos todos los procedimientos de la cobranza de contribuciones sin excepción los que llevan consigo medidas coactivas contra las personas que tomen parte en ella o en los repartimientos, y la manera y la medida coactiva que procede, ya contra los cobradores, ya contra los Alcaldes y Ayuntamientos:

Vistos los artículos 70 y 288 del Código penal, que dispone, el primero que no quedan sujetos a las prescripciones de dicho Código los delitos que estuviesen penados por leyes especiales, y el segundo que el empleado público que, requerido por Autoridad competente no preste la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, será castigado con la suspensión de oficio y multa de 10 a 100 duros:

Considerando: 1.º Que la disposición genérica de este art. 288 del Código penal se halla limitada por la del 7.º, toda vez que la ley, el Real decreto y las Reales órdenes citadas establecen terminantemente la manera como se ha de proceder en los casos, en que los funcionarios que deban prestar cooperación o auxilio para verificar la cobranza de las cargas impuestas por el Estado no la prestasen, consignando además una sanción penal para estos casos, a los que se da el carácter de gubernativos, para los procedimientos que ocasionasen:

2.º Que este supuesto, gubernativamente ha delido y debe castigarse la falta que parece cometió el Alcalde Don Francisco Gil, sin perjuicio de que si del expediente instruido de este modo resultasen nuevas faltas por parte de los delitos de atentado y desacato, que también se le imputan al mismo Alcalde, aunque hasta ahora ni se prueban ni han sido objeto de los procedimientos incoados, se pase por este concepto a los Tribunales de justicia el tanto de culpa que resulte:

Las Secciones opinan que procede confirmar la negativa del Gobernador de Málaga, y lo acordado.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 4 de enero de 1859.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Málaga.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 16 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guillán.

En la Gaceta de Madrid número 42 del viernes 11 de febrero se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En atención a no haber tenido efecto por falta de licitadores las tres subastas celebradas en virtud de Reales órdenes de 14 de setiembre, 21 de noviembre y 31 de diciembre últimos, para contratar la construcción de seis sillares-correos de cuatrocientos y dos de dos, con destino a la Dirección de Correos, y de conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, Vengo en autorizar al de la Gobernación para contratar dicho servicio, sin las formalidades de subasta pública, mediante a hallarse comprendido el presente caso en la excepción 8.ª del art. 6.º de mi Real decreto de 27 de febrero de 1852.

Dado en Palacio a 2 de febrero de 1859.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Administración.—Negociado 6.º

Excmo. Sr.: Remitido a informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente sobre si es o no necesaria autorización del Gobernador de Toledo para procesar al Juez de Lillo a D. Juan Antonio Maroto, Alcalde que fué de Romeral, por no haber dado curso a una cartagüa para la captura de varios ladrones, han consultado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Las Secciones han examinado el expediente instruido sobre si es o no necesaria la autorización del Gobernador para procesar a D. Juan Antonio Maroto, Alcalde que fué del Romeral en 1851:

Resulta de los antecedentes, que a consecuencia de un robo cometido en el 28 de agosto de 1851, en jurisdicción de Manzanaque, el Alcalde expidió cartagüa el mismo día a otros varios pueblos para la captura de los ladrones, comprendiendo en ella las señas de ellos que hasta entonces había podido obtener. Encargábase en este documento su cumplimiento y devolución al punto de partida.

Terminadas las diligencias de la sumaria y remitidas al Juzgado de Orgaz, notóse que faltaba la cartagüa o requisitoria, y se dictaron las disposiciones convenientes para recogerla e indagar cual de las Autoridades requirió la había retenido. Expidióse una circular al efecto, y resultó que el Alcalde de Romeral, D. Juan Antonio Maroto, había recibido la cartagüa, pero no apareció que le hubiese dado curso.

En vista de esto, el Juez de Orgaz exhortó al de Lillo, remitiéndole un tanto de culpa contra el Alcalde, lo que dió origen a la formación de la causa sobre que versa el expediente. El Juez, oído el Promotor fiscal, dió parte al Gobernador de estar procediendo contra el Alcalde en la creencia de que era innecesaria la autorización, porque el delito cometido por este había sido desempeñado funciones como auxiliar del Juzgado, y no como funcionario del orden administrativo.

El Gobernador pidió al Juez que ampliase y aclarase su petición, y entre tanto remitía los documentos necesarios al efecto, siguió la causa por todos sus trámites y dictó sentencia, remitiendo los autos en consulta a la Superioridad.

El Gobernador acudió a la Audiencia manifestando que era necesaria la autorización previa para proceder, y el Tribunal, en su vista, declaró sin efecto la sentencia consultada, y devolvió todo lo

remitido al Juez para los efectos del Real decreto de 27 de febrero de 1850.

El Gobernador insistió en su anterior pretensión, de conformidad con lo informado por el Consejo provincial, fundado en que el Alcalde había obrado como delegado de la Administración civil en el ejercicio de sus funciones de policía.

El Juez, oído el Promotor fiscal, se declaró competente para conocer en el asunto sin previa autorización, cuyo auto consultado fué confirmado por la Audiencia territorial.

Visto el art. 73, núm. 2.º de la ley de Ayuntamientos, según el cual corresponde al Alcalde adoptar, donde no hubiese delegado del Gobierno para este objeto, todas las medidas protectoras de la seguridad personal, de la propiedad y de la tranquilidad pública, con arreglo a las leyes y disposiciones de las Autoridades superiores:

Visto el art. 33 del Reglamento provisional para la administración de justicia, en que se atribuye a los Alcaldes la formación de las sumarias en las causas criminales por los delitos que se cometan dentro de su jurisdicción:

Visto el art. 106 del Reglamento de Juzgados de 1.º de mayo de 1844, según el cual, en la formación de estas diligencias y en las que practiquen en virtud de los despachos que los Juzgados les libren, serán considerados los Alcaldes, o sus Tenientes, como delegados y auxiliares de los Juzgados, y subordinados, por lo tanto, a ellos:

Visto el Real decreto de 27 de marzo de 1850, dictando reglas para procesar a los Gobernadores, corporaciones y funcionarios dependientes de su autoridad:

Considerando que aun cuando no es exacto que la cartagüa extraviada que ha dado origen a la formación de esta causa procediese del Juzgado de Orgaz, sino del Alcalde de Manzanaque, cuando formaba las primeras diligencias de la sumaria, en este caso, obraba, no como delegado de la Administración civil, sino de la de Justicia, conforme al art. 106 del Reglamento de Juzgados:

Considerando que bajo este supuesto, al expedir la cartagüa, y al darle cumplimiento los Alcaldes a quienes iba dirigida, obraban como auxiliares de la administración de justicia en virtud a la policía judicial que les corresponde, y por consiguiente con entera independencia de la Autoridad superior administrativa de la provincia,

Opinan puede V. E. servirse consultar a S. M. que es innecesaria la autorización.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (que Dios guarde) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico a V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de enero de 1859.—José de Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 18 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guillán.

En la Gaceta de Madrid número 50 del sábado 19 del actual se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICION A S. M.

SEÑORA: Reconocida por la ciencia económica y por las leyes la necesidad de que el Estado se reserve el dominio o la inspección de los montes, cuyo fomento y conservación no puede ser encomendado al interés particular, o cuyo aniquilamiento produciría funestos y trascendentales

trastornos en el clima, en la agricultura y en la vida de los pueblos, importa sobremanera procurar todas las garantías posibles del acierto al descender al examen de cuales montes han de seguir bajo el imperio de las Ordenanzas generales de fomento y cuales otros deberán convertirse en propiedad de los particulares: clasificación delicada y digna de ser hecha con gran esmero, porque si sería muy perjudicial entregar a la especulación privada lo que solo el Estado puede cuidar convenientemente, también debe evitarse que sean sustraídos del mercado aquellos montes cuya enajenación no haya de producir perniciosos efectos.

Conformándose con lo que en un extenso y razonado informe había propuesto la Junta facultativa del ramo, el Real decreto de 26 de octubre de 1855 dividió en tres clases todos los montes, según sus especies arbóreas, entregando unos desde luego a la venta, exceptuando otros, y disponiendo que los restantes fuesen estudiados uno a uno para decidir en cada caso particular sobre la necesidad de su reserva o la conveniencia de su enajenación. Por no haberse realizado con la conveniente actividad la clasificación definitiva de estos últimos, creyóse ver en ella una rémora para el pronto cumplimiento de la ley de desamortización, y a fin de hacerla desaparecer, el Real decreto de 27 de febrero de 1856 intentó un nuevo método.

Puso en estado de venta, no solo los montes anteriormente declarados enajenables, sino también todos aquellos cuya enajenación se había tenido por de discutible utilidad; reservando al Gobierno la facultad de exceptuar de la desamortización tanto a los de una como a los de otra clase, cuando razones graves de interés público se lo aconsejaron. El estudio de la amplitud y de la extensión que debiera darse al ejercicio de esa facultad, no exigía ciertamente menos trabajo ni tiempo que el de la clasificación definitiva de los montes: que el Real decreto de 26 de octubre había dejado en la clase de cuestionables: por lo que, el nuevo método, sin ventaja sobre el primero por lo tocante a la rápida ejecución de los trabajos necesarios para separar los montes enajenables de los inalienables, disminuyó las garantías de acierto, consignando desde luego como principio la desamortización de los dudosos, y convirtiendo en excepción, en vez de establecer como regla general, la intervención científica y administrativa del Ministerio de Fomento en el examen de los montes que debieran reservarse.

La experiencia ha demostrado que el verdadero problema que hay que resolver en este punto es el de la rapidez de las operaciones de clasificación, dando a esta desde luego los prudentes límites que le señaló el Real decreto de 26 de octubre, y esforzando los trabajos convenientes para llevarla en el mas breve plazo posible a su completo desarrollo. En ningún otro objeto puede ser empleada con mayor fruto la ciencia del Cuerpo facultativo de Montes, que, como otras tantas mejoras, ha tenido su origen y espera su desenvolvimiento en el reinado de V. M.; y pocos servicios pueden exigírsele de tanta importancia como este trabajo, que solo los Ingenieros del ramo pueden hacer de un modo conveniente, y al que se dedicarán con toda actividad, y prefiriéndolo a todo otro, si V. M. se digna prestar su aprobación al adjunto proyecto de Real decreto, que tengo la honra de someterle, de acuerdo con el Consejo de Ministros.

Madrid 16 de febrero de 1859.—SF. NORA.—A L. R. P. de V. M.—El Marqués de Corvera.

REAL DECRETO.

En vista de las razones que me ha expuesto el Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Para la ejecución del art. 2.º de la ley de 1.º de mayo de 1855

regirá la clasificación de montes, establecida por el Real decreto de 26 de octubre del mismo año.

Art. 2.º El Ministro de Fomento dictará las medidas convenientes para que por los Ingenieros de Montes sean clasificados estos con arreglo á lo que el artículo anterior dispone.

Art. 3.º Con el fin de que esta clasificación se verifique á la mayor brevedad y sin impedir el curso de las ventas, cuidarán los Gobernadores de remitir al Ministerio de Fomento, siempre que se trate de la enajenación de líneas pobladas, en todo ó en parte, de monte, copia autorizada y literal de los documentos siguientes:

1.º De la solicitud de subasta ó de la orden del Gobernador que haya iniciado el expediente;

2.º De la tasación de los peritos;

3.º Del informe del Ingeniero de Montes.

Art. 4.º Cuando un monte sea incluido por el Ingeniero entre los de tercera clase, se procederá desde luego á su venta en la forma debida, y dándose inmediatamente cuenta al Ministerio de Fomento, que podrá reclamar que la subasta no se lleve á efecto, si por otros datos tuviese conocimiento de que no está bien hecha la clasificación.

Art. 5.º En los demás casos, el Ministerio de Fomento, en vista de cada expediente, resolverá si el monte se debe vender ó no.

Si no dictare resolución en el plazo que el artículo siguiente señala, se entenderá que aprueba la enajenación de la finca, en el caso de que ésta hubiese sido clasificada por el Ingeniero como monte de segunda clase.

Art. 6.º En su consecuencia, los Gobernadores podrán proceder á anunciar la subasta en la forma debida, y llenando todos los trámites que los reglamentos é instrucciones vigentes marcan, si consta en el expediente que median veinte días entre el anuncio de la venta y el en que se haya recibido del Ministerio de Fomento la comunicación en que acuse por su parte el recibo del expediente.

Llegado el día del remate, se adjudicará este en la forma que proceda; y una vez hecha la adjudicación, subsistirá aun cuando se recibiere después la resolución del Ministerio de Fomento declarando que no debe hacerse la venta.

Art. 7.º Se autoriza al Ministerio de Fomento para suspender, de acuerdo con el de Hacienda, la enajenación de los terrenos que, aunque estén desnudos de árboles, forman las montañas, las riberas escarpadas, las costas acantiladas, las dunas, las arenas y demás que, no siendo á propósito para el cultivo agrícola, deban ser objeto de plantíos.

Art. 8.º El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución del presente Real decreto.

Dado en Palacio á 16 de febrero de 1839.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Fomento, Rafael de Bustos y Castilla.

(Se continuará.)

LISTA de los sujetos que han tomado parte en la votación de este día para la elección de Diputado á Cortes, y resumen de los votos que cada candidato obtuvo.

NOMBRES DE LOS VOTANTES.	SU VECINDAD.
D. Manuel Gomez	Sorga
D. Antonio Puga	Abelleira
D. Manuel Fernandez	Rubi-s
D. Ignacio Benito Fernandez	Celanova
D. Benito Mosquera	Matamá
Ramon Fernandez	Bola
Manuel Gutumuro	Rabal

José Perez
Francisco Vazquez
D. Inocente Saavedra

Dorna
Sta Maria
Celanova

RESUMEN DE LA VOTACION.

El Sr. D. Manuel Calderon Collantes y Herce obtuvo votos para Diputado á Cortes. 10.

Los infraescritos Presidente y Secretarios Escrutadores que componen la mesa del distrito electoral de esta capital, certificamos de la veracidad y exactitud del resultado de la votación de este día. Celanova febrero 21 de 1839.—El Presidente, José Benito Reza.—El Secretario Escrutador, José Esterz.—El Secretario Escrutador, Benito Bacerra.—El Secretario Escrutador, José M. Vazquez de Pobadura.—El Secretario Escrutador, Francisco Vello.

COMISION PROVINCIAL DE ESTADISTICA.

El Excmo. Sr. Vice-Presidente de la Comision de Estadística general del Reino con fecha 15 del corriente entre otras cosas me dice lo que sigue.

Habiéndose meditado de nuevo por la Comision general sobre la importancia que en esa provincia tiene la clasificación por parroquias, siempre que se trata de manifestar el modo de ser de las poblaciones y viviendas, ha resuelto que la parroquia figure en el Nomenclator como division del Ayuntamiento, para subdividirse en lugares, caserios y aliejos. Al efecto, se remiten á V. S. nuevos estados con una casilla adicional para las parroquias, á fin de que los distribuya entre los Ayuntamientos para que inscriban en ellos los datos del nuevo Nomenclator, pudiendo utilizar los que se les han distribuido anteriormente como de borradores. Lo que se dice en los artículos de la instruccion del 5 de enero del 5.º al 12, sobre el modo de escribir los nombres de las poblaciones y viviendas, es aplicable en lo que proceda á los de las parroquias. Respecto al orden alfabético de que se trata en el art. 24, debe advertirse que ha de guardarse el de las parroquias dentro de cada Ayuntamiento, y el de las poblaciones y viviendas dentro de cada parroquia; entendiéndose modificado en este sentido aquel artículo. Por no producir confusion en los varios artículos de la instruccion, que se refieren á las relaciones de las casillas de los estados entre si, se ha omitido poner número de orden á la que se ha aumentado de parroquias. Sirvase V. S. tenerlo así entendido, y disponer lo que crea mas acertado para conseguir exactamente el número de parroquias, en relacion con las operaciones del nuevo Nomenclator.

Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial para conocimiento de los Ayuntamientos de esta provincia y su mas exacto y puntual cumplimiento; á cuyo efecto dispondrán los datos que tengan reunidos en la

forma que se previene, para trasladarlos con la mayor brevedad á los nuevos estados que recibirán por el correo inmediato. Orense 22 de febrero de 1839.—E. G. P., Hermenegildo Guillan.

COMISION PRINCIPAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES de la provincia de Orense.

Por disposicion del Sr. Gobernador civil de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.º de mayo de 1835, 11 de julio de 1836, Real decreto de 2 de octubre de 1838 é instrucciones para su cumplimiento. Se sacan á pública subasta en el día y hora que se diga las fincas siguientes:

Remate para el día 26 de marzo próximo de once á una del día en las casas consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de Hacienda D. Rafael Barrio y Alcalde, y escribano D. Valentin Novoa.

BIENES DE CORPORACIONES CIVILES.

Rústicas.—Instruccion pública inferior.—Menor cuantía.

AYUNTAMIENTO DE BALTAR.

Número del inventario.

137 Un nabal sito en Molino de Torga procedente de sus escuelas, su mensura 26 copelos ó sean 7 áreas y 81 centiáreas, linda sur y oeste Domingo Valencia, norte pared y este camino. Fué tasado en renta en 3 rs. y 12 cénts., por la que ha sido capitalizado en 70 rs. y 20 cénts. y en venta en 104 rs. que servirán de tipo para la subasta.

136 Otro nabal sito en Terroal de igual procedencia, su mensura 1 ferado ó sean 9 áreas y 5 centiáreas, cerrado sobre si, linda este Vicente Lorenzo, oeste Manuel Perez. Fué tasado en renta en 6 reales, por la que ha sido capitalizado en 136 rs. y en venta en 200 rs. que servirán de tipo para la subasta.

139 Un centenar sito en Ponte da Pedra de la misma procedencia, su mensura 19 copelos ó sean 5 áreas, 73 centiáreas, linda este Juan Cuquejo, oeste Francisco Cuquejo, norte José Sueiro y sur camino. Fué tasado en renta en 1 real y 50 cénts. por la que ha sido capitalizado en 33 rs. y 75 cénts. y en venta en 50 rs. que servirán de tipo para la subasta.

133 Otro centenar en Carreiras de la misma procedencia, su mensura 71 copelos ó sean 21 áreas y 43 centiáreas, linda oeste Domingo Perez, este Francisco Delgado y sur camino. Fué tasado en renta en 6 rs. y 39 cénts., por la que ha sido capitalizado en 143 rs. y 75 cénts., y en venta en 213 rs. que servirán de tipo para la subasta.

135 Un pastero cerrado sobre sí en Forgal de igual procedencia, su mensura 21 copelos ó sean 6 áreas 23 centiáreas, linda este Domingo Perez y oeste camino. Fué tasado en renta en 2 reales 49 cénts., por la que ha sido capitalizado en 56 rs. y 3 cénts. y en venta en 83 reales que servirán de tipo para la subasta.

ESCUELAS Y AYUNTAMIENTO DE PORQUEZA.

131 Un nabal que fué huerta en Jocin, su mensura 27½ copelos ó sean 8 áreas 31 centiáreas, linda sur con casa de igual procedencia, oeste camino, norte Vicente Vazquez y este herederos de Francisco do Barrio. Fué tasado en renta en 6 rs., por la que ha sido capitalizada en 135 rs. y en venta en 200 rs. que servirán de tipo para la subasta.

ABYRTENCIAS.

1.º No se admitirá postera que no cubra el tipo de la subasta.

2.º El precio en que se remata das las fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean de mayor ó de menor cuantía y procedan de corporaciones civiles, se pagará este en diez plazos iguales de a 10 por 100 cada uno. El primero á los quince días siguientes al de notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año cada uno para que en nueve quede cubierto todo su valor, segun se previene en la ley de 11 de julio de 1836.

3.º Las fincas de mayor cuantía del Estado continuarán pagándose en los quince plazos y 11 años que previene el art. 6.º de la ley de 1.º de mayo de 1835, y con la bonificación del 5 por 100 que el mismo otorga a los compradores que anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán en veinte plazos iguales, ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los compradores que anticipen uno y mas plazos no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual: en el concepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo que se dispone en las instrucciones de 31 de mayo y 30 de junio de 1835.

4.º Segun resulta de los antecedentes y demás datos que existen en la Administración de Propiedades y Derechos del Estado de esta provincia, las de que se trata no se hallan gravadas con carga alguna, pero si apareciesen posteriormente se indemnizará al comprador en los términos que en la citada ley se determina.

5.º Los derechos del expediente hasta la toma de posesion serán de cuenta del rematante.

6.º A la vez que en esta capital habrá otro remate en el mismo día y hora en Ginzó, á cuyo partido corresponden las fincas anteriores.

Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que quieran interesarse en la adquisición de las fincas insertas en el precedente anuncio.

NOTAS.

1.º Se consideran como bienes de Corporaciones civiles, los Propios, Beneficencia, Instruccion pública, cuyos productos no ingresan en las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan á las provincias y á los pueblos.

2.º Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los del Clero, los de Instruccion pública superior, cuyos productos ingresen en las Cajas del Estado, los del secuestro del ex Infante D. Carlos, los de las órdenes militares de San Juan de Jerusalem, los de Cofradías, Obras pías, Santuarios y todos los pertenecientes y que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualesquiera que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundacion, á excepcion de las capellanías colativas de sangre.

Orense 21 de febrero de 1839.—E. C. L., Angel M. Lozano.

Ayuntamiento de Canedo.

Esta corporacion y asociados acordaron anunciar la subasta de la numeracion de las casas de este distrito, como tambien la medicion de las distancias entre los lugares y la casa consistorial y los caserios etc. que comprende.

El remate tendrá lugar el 26 del corriente á las doce del día, con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto en la secretaría de la corporacion. Canedo febrero 18 de 1839.—Manuel Páramo de Lariño.

Idem de Beado.

En el día 23 del corriente y hora de doce de la mañana, se rematará en el mas ventajoso postor con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto, la rotulacion de calles y numeracion de casas de este distrito municipal.

Beado 23 de febrero de 1859.—*Vicente Gabilan.*

Idem de Castro Caldelas.

Esta corporacion y demas señores asociados, en sesion de ayer han acordado, que para dar cumplimiento á la Real orden circular de 31 de diciembre último se anuncie la subasta de los trabajos de la titulacion de las calles y numeracion de las casas comprendidas dentro de los límites de esta municipalidad; señalándose para su remate el día 4 del mes próximo venidero y hora de las tres de su tarde en la casa consistorial de la misma, á cuyo punto puede concurrir cualquiera persona que guste interesarse en dichos trabajos, los que serán adjudicados á favor del mas ventajoso postor con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto en el referido acto. Y para que llegue á conocimiento de todos se fija el presente. Castro de Caldelas febrero 21 de 1859.—*El Conde de Oleiros.*—*Valentin Villar, secretario.*

Juzgado de 1.ª instancia de Ribadavia.

Don Francisco Maria Donnet, juez de primera instancia del partido de Ribadavia.—Por el presente se emplaza á Gerardo Mariño, vecino de esta villa, pero ausente, para que dentro del término improrrogable de seis dias comparezca en este juzgado por la escritura del que autoriza á contestar la demanda de pobreza que le ha promovido José Fernandez de esta vecindad, apercibido que de no verificalo le parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Ribadavia á 10 de febrero de 1859.—*Francisco M. Donnet.*—*Felipe Varela.*

Idem de la Coruña.

El Doctor Don Vicente Gutierrez Piuero, juez de Hacienda de la provincia y de primera instancia de esta ciudad y su partido judicial.—Por el presente edicto cita, llama y emplaza á todos los que se consideren con derecho á la herencia intestada de doña Maria Rodriguez Pastoriza que falleció en esta ciudad el día 24 de enero último, para que dentro del término de treinta dias contados desde la fecha, comparezcan por sí ó persona autorizada al efecto á deducir de su derecho en los autos de testamnetaria que sobre el particular penden en este juzgado y escribanía del que autoriza; apercibidos de que transcurrido dicho término sin verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar.

Y para que lleve á su noticia firmo el presente en la Coruña á 10 de febrero de 1859.—*Vicente Gutierrez Piuero.*—Por mandado de dicho señor, *Jacobo Varela y Gomez.*

Juzgado 1.º de paz de Villanueva de los Infantes.

En este juzgado 1.º de paz de Villanueva de los Infantes se ha pronunciado la sentencia que dice:

Sentencia.—En la audiencia del juzgado de paz primero de Villanueva de los Infantes, á 25 de diciembre de 1858, en

Sr. D. Miguel Mourino, juez de ella por autenti secretario dijo:

Que habiendo visto la precedente acta de juicio verbal, de la que resultó;

Que Máximo Sousa, labrador y vecino de Freijo, reclama de Ramon San Miguel ó los suyos del pueblo de Freijoso, la cantidad de 400 rs. que le estaba adeudando segun obligacion que conservaba;

Resultando que ni el Ramon San Miguel, los suyos ó quien le representase no se han presentado á contestar á la demanda á pesar de haber sido citados segun la ley lo previene, y consta de la diligencia de entrega de la copia de papelita en la original que obra por cabeza;

Resultando que para justificar el demandante su reclamacion, presentó la obligacion que suena otorgada por el Ramon San Miguel;

Considerando que si bien no la reconoce el otorgante por no haberse presentado ni los testigos que en ella sueñan por haberse fallecido, excepto uno que tambien se halla ausente, reconocen las firmas de estos sus convecinos Lorenzo y Felipe Alvarez, Pedro y José Rodriguez, Ramon Salgado y Pedro Alonso;

Falla: que debe de declarar y declara en rebeldia al Ramon San Miguel y los suyos ó quien su derecho representa, y les condena al pago de los 400 rs. y las costas de este juicio y mas á que diere lugar dentro de diez dias.

Y por esta definitivamente juzgando en primera instancia así lo pronuncia, manda y firma de que certifico y lo mismo de que se le notifique esta sentencia al demandante y por el demandado segun lo previenen los art. 1,182 y 1,185 de la ley de enjuiciamiento civil.—*Miguel Mourino.*—*Manuel Perez Lamela, secretario.*

Y para que tenga efecto su publicacion segun lo dispuesto en el art. 1,190 de dicha ley, la transcribo á V. S. al fin indicado.

Villanueva de los Infantes diciembre 31 de 1858.—*Miguel Mourino.*—*Manuel Perez Lamela.*

Gobierno de la provincia de Lugo.

El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernacion del Reino, me comunica con fecha 9 del actual la Real orden que sigue.—El Señor Ministro de la Gobernacion dice con esta fecha al Director general de Correos lo siguiente.—Ilmo. Sr.:—La Reina (q. D. g.) se ha dignado mandar que se saque á pública subasta la conduccion del correo diario entre Lugo y Monforte, bajo el tipo de diez mil ochenta reales anuales y con sujecion á las condiciones del adjunto pliego.—De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo trasladó á V. S. para los efectos correspondientes.—Cuya Real orden he acordado publicar en este periódico, así como el pliego de condiciones que va á continuacion, para que llegue á noticia de todas las personas que gusten interesarse en la subasta, que tendrá lugar en el local que ocupa este Gobierno de provincia el día 28 á la hora de doce de su mañana. Lugo 16 de febrero de 1859.—*Rafael Húmara y Salamanca.*

Pliego de condiciones bajo las cuales ha de sacarse á pública subasta la conduccion diaria del correo de ida y vuelta entre Lugo y Monforte.

1.ª El contratista se obligará á conducir diariamente la correspondencia y periódicos, desde Lugo á Monforte y viceversa, pasando por los pueblos que el mar-

2.ª La distancia que media entre ambos puntos se correrá en doce horas, con arreglo al itinerario vigente sin perjuicio de las alteraciones que en lo sucesivo acuerde la Direccion, por considerarse convenientes al servicio.

3.ª Por los retrasos cuyas causas no se justifiquen debidamente, se exigirá al contratista en el papel correspondiente la multa de 20 rs. vn. por cada media hora; y á la tercera falta de esta especie podrá rescindirse el contrato abonando además dicho contratista los perjuicios que se originen al Estado.

4.ª Para el buen desempeño de esta conduccion deberá tener el contratista el número suficiente de caballerías mayores situadas en los puntos mas convenientes de la línea á juicio del Administrador principal de correos de Lugo.

5.ª Será obligacion del contratista correr los extraordinarios del servicio que ocurran, cobrando su importe al precio establecido en el Reglamento de Postas vigente.

6.ª Contratado el servicio, no se podrá subarrendar, ceder ni traspasar sin previo permiso del Gobierno.

7.ª Si por faltar el contratista á cualquiera de las condiciones estipuladas se irrogasen perjuicios á la Administracion, esta para el rescimiento, podrá ejercer su accion contra la fianza y bienes de aquel.

8.ª La cantidad en que quede rematada la conduccion se satisfará por mensualidades vencidas en la referida Administracion principal de correos de Lugo.

9.ª El contrato durará dos años contados desde el día en que dé principio el servicio; cuyo día se fijará al comunicar la aprobacion superior de la subasta.

10. Tres meses antes de finalizar dicho plazo, lo avisará el contratista á la Administracion principal respectiva, á fin de que con oportunidad pueda procederse á nueva subasta; pero si en esta época existiesen causas que impidiesen verificarlo, el contratista tendrá obligacion de continuar por la tácita tres meses mas, bajo el mismo precio y condiciones.

11. Si durante el tiempo de este contrato fuese necesario variar en parte la línea designada, y dirigir la correspondencia por otro ú otros puntos, serán de cuenta del contratista los gastos que esta alteracion ocasionase, sin derecho á indemnizacion alguna; pero si las expediciones se aumentasen ó resultare de la variacion aumento ó disminucion de distancias, el Gobierno determinará el abono ó rebaja de la parte correspondiente de la asignacion á prorata. Si la línea se variase del todo, el contratista deberá contestar dentro del término de los quince dias siguientes al en que se le dé el aviso, si se aviene ó no á continuar el servicio por la nueva línea que se adopte; en caso de negativa queda al Gobierno el derecho de subastar nuevamente el servicio de que se trata. Si hubiese necesidad de suprimir la línea, el Gobierno avisará al contratista con un mes de anticipacion para que retire el servicio, sin que tenga este derecho á indemnizacion.

12. La subasta se anunciará en la Gaceta y Boletín oficial de la provincia de Lugo y por los demas medios acostumbrados; y tendrá lugar ante el Gobernador de la misma y Alcalde de Monforte asistidos del Administrador de Correos del mismo punto el día 23 de febrero actual, á la hora y en el local que señale dicha autoridad.

13. El tipo máximo para el remate será la cantidad de 10,080 rs. vn. anuales, no pudiendo admitirse proposicion que exceda de esta suma.

14. Para presentarse como licitador será condicion precisa depositar previamente en la Tesoreria de Hacienda pública de dicha provincia como deponencia

de la Caja general de Depósitos, la suma de 859 rs. vn. en metálico, ó su equivalente en títulos de la Deuda del Estado, la cual, concluido el acto del remate, será devuelta á los interesados, menos la correspondiente al mejor postor, que quedará en depósito para garantía del servicio á que se obliga hasta la conclusion del contrato.

15. Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, y serán anónimas, poniéndose en lugar de firma un lema, y fijándose en letra la cantidad en que el licitador se compromete á prestar el servicio. A cada proposicion acompañará otro pliego tambien cerrado en el que se escribirá el mismo lema, el domicilio del proponente, y su firma, ó la de persona autorizada cuando no sepa escribir; á este pliego se unirá la carta de pago original que acredite haberse hecho el depósito prevenido en la condicion anterior. El pliego que contenga la proposicion llevará en su sobrescrito solo la palabra *Proposicion*; y el de la firma y domicilio del proponente, el lema que se haya fijado al pie de aquella.

16. Los pliegos con las proposiciones han de quedar precisamente en poder del Presidente de la subasta, durante la media hora anterior á la fijada para dar principio al acto; y una vez entregados no podrán retirarse.

17. Para extender las proposiciones se observará la fórmula siguiente: «Me obligo á desempeñar la conduccion del correo diario desde Lugo á Monforte y viceversa, por el precio de... rs. anuales, bajo las condiciones contenidas en el pliego aprobado por S. M.» Toda proposicion que no se halle redactada en estos términos, ó que contenga modificacion ó cláusulas condicionales, será desechada.

18. Abiertos los pliegos y leídos públicamente, se estenderá el acta del remate, declarándose éste en favor del mejor postor, sin perjuicio de la aprobacion superior, para lo cual se remitirá inmediatamente el expediente al Gobierno.

19. Si de la comprobacion de las proposiciones resultasen igualmente beneficiosas dos ó mas, se abrirá en el acto nueva licitacion á la voz por espacio de media hora, pero solo entre los autores de las propuestas que hubiesen causado el empate.

20. Hecha la adjudicacion por la superioridad, se elevará el contrato á escritura pública, siendo de cuenta del rematante los gastos de su otorgamiento y de dos copias para la Direccion general de Correos, una simple y otra en papel sellado correspondiente.

21. El mismo rematante quedará sujeto á lo que previene el art. 5.º del Real decreto de 27 de febrero de 1852, si no cumplierse las condiciones que deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga efecto en el término que se le señale.

22. Será de cuenta del contratista conservar en buen estado las maletas en que se conduzca la correspondencia, y preservar esta de la humedad y deterioro.

23. Será requisito indispensable que los conductores de la correspondencia pública sepan leer y escribir. Madrid 9 de febrero de 1859.—El Subsecretario, Juan de Lorenzana.

En la extraccion de la loteria primitiva, celebrada en Madrid el día 21 del actual, han salido agraciados los números siguientes:

41.—38.—3.—62.—28.